

COMUNICADO DEL PRESBITERIO DE LA DIÓCESIS DE SAN MARCOS

Nosotros, los responsables de las distintas parroquias, junto con nuestro Obispo, a la luz de nuestra experiencia anual de ejercicios espirituales, en la cual nos sentimos interpelados por el rostro del Señor Jesús, presente en la Eucaristía, en la Palabra y en los pobres, hacemos saber, a las autoridades que se disponen a visitarnos en el gabinete móvil, lo siguiente:

1. Que la violencia generalizada en el departamento, -de modo especial en los municipios fronterizos -, provocada por el narcotráfico, comercio de indocumentados y delincuencia común, está transformando a muchas comunidades en ciudades sin ley.
2. Que la violación de los Derechos Humanos por parte de una policía no depurada, corrupta e insensible a la pobreza y demás problemas sociales de la población, hace que esta se vea forzada a tomar la justicia por sus propias manos ante la impunidad de los responsables.
3. Que cada día se incrementa la migración indocumentada hacia los Estados Unidos, por falta de políticas económicas y de proyectos de desarrollo que le ofrezcan dignas condiciones de vida con el agravante de quienes se van son, en un 60%, personas jóvenes.
4. Que otra parte de la población joven, ingresa en la delincuencia común por falta de oportunidades: estudio, trabajo; o por incumplimiento de lo garantizado en la Constitución, perdiendo de este modo el país el mejor potencial laboral, necesario para transformar y desarrollar la vida de la nación.
5. Que en los últimos años se han ido multiplicando los problemas relacionados con la tierra, dando origen a conflictos, enfrentamientos, miseria y muertes entre comunidades, y provocando un éxodo rural hacia México y Estados Unidos.
6. Que, al tiempo que se encarecen, crece el deterioro de los servicios sociales en las comunidades, o sencillamente se carece de ellos en muchas, tales como salud, educación, agua, transporte, vías de comunicación que merezcan tal nombre. En particular los problemas generados por la empresa Deocsa con su deficiente servicio y sus cobros abusivos y por las fumigaciones incontroladas de Moscamed.
7. Que se constata en la mayoría de las municipalidades, una abierta corrupción, con total ausencia de control fiscal y autoritarismo por parte de las autoridades.
8. Que, a pesar de elementales normas de un país en proceso democrático y de los acuerdos firmados, se excluye y margina a las comunidades indígenas, ignorando sus derechos.

9. Que no han sido consultadas las comunidades afectadas por las explotaciones mineras que, por otra parte constituyen proyectos favorecedores de empresas transnacionales, dejándoles a los pueblos destrucción del medio ambiente, más pobreza y nuevos problemas y daños probablemente de carácter irreversible, en un departamento que ya hoy se reconoce como el de más alto índice de pobreza absoluta.
10. Que todos estos problemas y muchos otros, hunden sus raíces en unas increíbles y bochornosas estructuras mantenidas desde hace siglos, como la escandalosa distribución de la propiedad de la tierra, que se ve acompañada y reforzada por un sistema de justicia, que convierte los interminables procesos judiciales entre campesinos despedidos y dueños de las grandes fincas en indefensión, impotencia y miseria de los trabajadores, pisoteados en sus derechos laborales, tras haber dejado su vida en esas tierras. O la detentación del poder político y económico por parte de una oligarquía empresarial, siempre la misma que debilita y maneja a los gobiernos según sus intereses, a tiempo que desestabilizan y hace ingobernable al país, imposibilitando un verdadero desarrollo.

Por lo tanto exigimos a quienes llegan con motivo del gabinete móvil:

1. Que su presencia en el departamento sirva para concretar fechas y dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por este gobierno, respondiendo a los problemas arriba mencionados y alejándose de propósitos puramente electorales.
2. Que combatan las causas de la emigración con sólidos proyectos de desarrollo, para evitar la sangría de población joven, con lo que ésta entraña de pérdida de potencial laboral.
3. Que se depure toda corrupción policial y que se tomen las medidas pertinentes para combatir el narcotráfico y además, que se busque una solución pacífica e integradora al problema de las maras.
4. Que se respete la autonomía de las municipalidades y se atienda la voluntad manifestada en las consultas populares contra las minas a cielo abierto. Al mismo tiempo, que se apoye una real y activa participación de los cocodes y comudes en la gestión municipal.
5. Que se emprenda la urgente tarea de redistribuir la tierra.
6. Que se vigile y se eleve la calidad de los imprescindibles servicios sociales en las comunidades.

Considerando lo anteriormente expuesto:

1. Les recordamos que jugar con la sencillez y buena voluntad de las personas y grupos que acuden al encuentro con sus gobernantes y ven incumplidos sus compromisos, provoca desilusión, desinterés y humillación.

2. Que ya mucha gente interpreta este continuo ir y venir de ministros y altos funcionarios al departamento en esta fechas, como una artimaña para evitar posibles movilizaciones de las diferentes organizaciones de la sociedad civil.
3. Que la facilidad y frecuencia con que los sucesivos gobiernos montan sus campañas electorales, conscientes de que mienten en sus promesas y se olvidan de sus palabras, buscando sólo intereses personales o de grupo, además de generar desencanto, hace que la noble función política caiga en el descrédito.
4. Nos preocupa que la frustración, producto de la desilusión y la desesperación prolongada en el tiempo, pudiera desencadenar una explosión cuyos efectos siempre son imprevisibles e incontrolables.

San Marcos, 2 de Septiembre de 2005